



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-008-2020-00390-01
Demandante: Carlos Antonio Maya Vélez
Demandado: Colpensiones, Porvenir S.A., Protección S.A.
Asunto: Consulta sentencia
Procedencia: Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, diciembre catorce (14) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 14 de octubre del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor CARLOS ANTONIO MAYA VÉLEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION S.A. Radicado 05001-31-05-008-2020-00390-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor CARLOS ANTONIO MAYA VÉLEZ, llamó a juicio a COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare que el traslado del Régimen de Prima Media a Porvenir S.A., es ineficaz por vicios del consentimiento, declarándose su pertenencia al régimen administrado por Colpensiones, en consecuencia, se condene a Protección S.A, a trasladar los aportes de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos a Colpensiones, condenándose a esta última a recibir los mismos.

Como fundamento de lo pretendido se relató que el señor Carlos Antonio Maya Vélez nació el 05 de mayo de 1960, que se afilió al ISS en el año 1979, que en el año 1994 un asesor de Porvenir S.A, le manifestó insistentemente al actor y a un grupo de compañeros de trabajo, que se trasladaran, por ser dicho fondo mucho mejor que el ISS, además que éste se iba a acabar, haciéndose efectivo el traslado a partir de julio de 1994, afirmando que Porvenir S.A. y Protección S.A., incumplieron el deber legal de información.

1.2.- CONTESTACIÓN

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado, **PORVENIR S.A.** replicó la demanda, exponiendo que no le consta la fecha de nacimiento del actor, ni la afiliación del mismo al ISS, afirmando que no es cierto lo indicado respecto de la afiliación del pretensor a Porvenir S.A., toda vez que el traslado se

efectuó el 16 de noviembre de 1994, en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, con la debida asesoría.

En su defensa formuló las excepciones de prescripción; prescripción de la acción de nulidad; cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

A su vez **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, aceptando como cierto la fecha de nacimiento del demandante y la afiliación al ISS; sosteniendo que no le constan los demás hechos de la demanda, por tratarse de situaciones de carácter particular del demandante y de los cuales no se tiene conocimiento, por lo que serán materia del debate probatorio.

A su vez, propuso las excepciones de carga dinámica de la prueba: particularidades del caso; inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en caso de ineficacia de traslado de régimen; improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación; devolución de cuotas de administración; buena fe; imposibilidad de condena en costas; prescripción; innominada y compensación.

Por último, **PROTECCIÓN S.A**, aceptó como cierta la fecha de nacimiento del actor, no constándole las afiliaciones al ISS y Porvenir S.A., afirmando que no es cierto que la entidad incumpliera su deber de información, toda vez que al demandante se le brindó una asesoría clara, completa, comprensible, veraz y profesional, la cual se realizó de forma independiente, estudiando las particulares del caso e informando las características propias del régimen, las implicaciones de la afiliación y las diferencias con el Régimen de Prima Media.

En oposición a las pretensiones presentó las expresiones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la

obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 14 de octubre del año 2022, declarando la ineficacia del acto jurídico de traslado que el demandante realizó a Porvenir S.A.; ordenó a Protección S.A, que en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media, devuelva a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos, incluidas las cuotas de administración, las primas de seguros, reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, lo que hará dentro de 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia; ordenó a Colpensiones que permita el traslado del accionante, conservando los beneficios que lo cobijaban al momento de su traslado de régimen, condenando en costas a Porvenir S.A. y Protección S.A.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de Porvenir S.A., solicitando se confirme la providencia de primera instancia, teniendo en cuenta que las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen una destinación específica por mandato legal, siendo claro que en este caso dichos descuentos han cumplido plenamente con su cometido, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la

generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta del afiliado y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte, sin que pueda retrotraerse la cobertura del servicio ya prestado.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta en favor de Colpensiones, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Carlos Antonio Maya Vélez nació el 05 de mayo de 1960, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía visible a folios 13 del anexo 02 del expediente digital.
- Que el actor se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Porvenir S.A., el 16 de noviembre de 1994, con fecha de efectividad el 1° de diciembre de la misma anualidad, trasladándose posteriormente a Protección S.A., el 18 de noviembre de 2008, tal y como se desprende de los formularios de afiliación obrantes a folios 42 y 51 del anexo 02 del expediente digital.

- Que el accionante acredita un total de 1783.85 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por Protección S.A. el 12 de abril del 2021, que milita a folios 46 a 63 del anexo 23 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta, proferida en el presente proceso por la señora Juez Octava Laboral del Circuito de Medellín, determinando si es ineficaz la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Porvenir S.A., efectuada por el demandante el 16 de noviembre de 1994 y su posterior movilidad a Protección S.A., el 18 de noviembre del 2008?

¿Si como consecuencia de la ineficacia, deberá ordenarse a Protección S.A., el traslado de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y los descuentos por seguros previsionales, con su respectiva indexación?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto de afiliación por incumplimiento del deber de información por parte Porvenir S.A, y por lo tanto, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria del demandante a Colpensiones, debiendo indexarse las sumas correspondientes a los descuentos por las cuotas de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales en consecuencia, la sentencia debe ser ADICIONADA en el numeral segundo, para ordenar a PROTECCIÓN S.A., el pago de la indexación de los citados conceptos, asimismo, para ordenar a PORVENIR S.A., traslade a COLPENSIONES las cuotas de administración,

los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria del demandante en vigencia de la afiliación a dicha entidad, esto es, entre el 1° de diciembre de 1994 y el 31 de diciembre de 2008, debidamente indexados. CONFIRMÁNDOLA en las demás partes.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994

y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 014 de octubre de 2008; SL Rad. 31314 del 014 de octubre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021 y más recientemente en las sentencias SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022 y SL1637 del 11 de mayo de 2022, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional del señor Carlos Antonio Maya Vélez, a través de la AFP Porvenir S.A., el 16 de noviembre de 1994, con fecha de efectividad el 1° de diciembre de la misma anualidad y el posterior traslado a Protección S.A., el 18 de noviembre de 2008, tal y como se desprende de los formularios de afiliación obrantes a folios 42 y 51 del anexo 02 del expediente digital, no obstante, los formularios de afiliación no dan cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

En relación al interrogatorio de parte realizado al pretensor, debe recordarse que el fin de dicho medio probatorio es la obtención de la confesión, situación que no ocurrió en el presente evento, resaltando que si bien sostuvo el actor no recordar muchos aspectos relacionados con las circunstancias en las cuales

se dio la afiliación y la información que le fue suministrada, no se desprende de ninguna de las respuestas brindadas que hubiera recibido información suficiente, siendo enfático en señalar que la motivación para el traslado a Porvenir S.A., lo fue el hecho de que había una información que el Seguro Social estaba mal, estaba quebrado, que era un riesgo permanecer en él, y que los fondos privados tenían mejores alternativas, por lo que se llenó miedo de poner en riesgo la pensión.

De lo anterior se colige que, si bien el actor se afilió tanto a Porvenir S.A., como a Protección S.A., de forma libre y voluntaria, pues así lo reconoció, ello lo hizo sin haber recibido la información completa, sin conocer las características, el funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las consecuencias del traslado y las desventajas que podría traerle dicho régimen.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Porvenir S.A. y posteriormente Protección S.A., cumplieran con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada del afiliado, sobre las implicaciones del traslado, siendo claro, que pese a la movilidad efectuada por el gestor del proceso dentro del régimen de ahorro individual, la ineficacia se predica en relación a la primera afiliación, con la cual se presenta el cambio del régimen pensional, sin que las asesorías posteriores recibidas por el afiliado tengan la capacidad de subsanar las deficiencias de esa afiliación inicial.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó Porvenir S.A. al demandante, al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización del demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión del actor.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de las administradoras accionadas, teniendo en cuenta, que fue Porvenir S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo Protección S.A., la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación del actor, por lo tanto, deben asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil, sin que tampoco se pueda desconocer el periodo en el cual estuvo el pretensor afiliado a Porvenir S.A.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad del demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización

cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación del pretensor, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual del demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de las AFP demandadas y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los

aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

En la misma providencia se pronunció la Alta Corporación, en torno a la procedencia de extender la obligación de devolución a todas las AFP a las cuales haya estado vinculado el afiliado *“los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión.”*

Sobre la indexación

Bajo la égida del grado jurisdiccional de Consulta en el que se conoce en favor de Colpensiones y en atención a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, se ordenará la indexación de las referidas sumas.

Así las cosas, la orden de traslado impartida por la falladora primaria, no se encuentra totalmente ajustada a los anteriores criterios, por lo tanto, debe ADICIONARSE el numeral segundo del fallo, para ordenar a Protección S.A., traslade debidamente indexados las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales. Así mismo se adiciona el mismo numeral, para ordenar a Porvenir S.A. el traslado

de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria del actor en vigencia de la afiliación a dicha entidad, esto es, entre el 1° de diciembre de 1994 y el 31 de diciembre de 2008, con su respectiva indexación.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **ADICIONA** el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral de Circuito de Medellín, el 14 de octubre de 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor CARLOS ANTONIO MAYA VÉLEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en el sentido de ORDENAR a PROTECCIÓN S.A., traslade debidamente indexados las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales. Así mismo, para ORDENAR a PORVENIR S.A., el traslado de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales, que afectaron el valor de la cotización obligatoria del actor en vigencia de la afiliación a dicha

entidad, esto es, entre el 1° de diciembre de 1994 y el 31 de diciembre de 2008, con su respectiva indexación.

2.- Se **CONFIRMA** en lo demás la sentencia de primera instancia

3.- Sin Costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


MARIA NANCY GARCIA GARCÍA
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma escaneada por salubridad pública
(Art. 11 Decreto 491 de 2020)


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado